



**Friedrich
Ebert** 
Stiftung

Valentina Machado Areco y Sofía Umbre Otaduy

Sindicalismo y transición justa. Experiencias de lucha en América Latina y el Caribe

1. ¿Por qué una *transición* y por qué *justa*?

El actual sistema energético mundial está basado en la extracción y quema de combustibles fósiles (que se encuentran debajo de la tierra, como el carbón, el petróleo y el gas natural). La extracción de estos materiales y las tecnologías que lo posibilitan son dañinas para el medioambiente, por varias razones, además de responder a lógicas y funcionar mediante dinámicas de concentración y despojo.

Una de las razones con mayor relevancia en la opinión pública, organizaciones sociales e incluso en los discursos de muchos gobiernos es que la extracción fósil libera gases de efecto invernadero, principal causa del calentamiento global y por tanto del cambio climático. Estos gases se acumulan en la atmósfera, retienen el calor e impiden la liberación de este al espacio, elevando así las temperaturas de la tierra —calentamiento global— y causando fenómenos climáticos extremos como olas de calor, incendios e inundaciones. Estos ejemplos evidencian que los impactos en el medioambiente son impactos directos en la vida humana.

El dióxido de carbono (CO_2) es señalado como uno de los principales gases de efecto invernadero. Si bien existe en la atmósfera de manera natural, en las últimas décadas la generación de CO_2 se aceleró debido a la creciente industrialización y a un sistema capitalista que descuida la vida y los bienes comunes, que acumula riqueza según una filosofía de «sálvese quien pueda».

Por esto, hay consenso en la comunidad científica en que un camino posible para frenar el calentamiento global es la descarbonización, que significa dejar de utilizar combustibles fósiles y pasar a energías renovables, también llamadas «limpias», como la luz solar y el viento. Esto es la transición energética.

Ahora bien, esta transición por sí misma no basta para minimizar los impactos desiguales del modelo energético sobre la población históricamente vulnerada. Debe ser una transición que tenga en cuenta el medioambiente, así como la economía y las comunidades/colectivos que integran la sociedad; una transición justa.

Esto quiere decir un cambio integral, que considere factores ambientales, sociales, económicos y con perspectiva de género. Una transformación profunda del sistema energético que tenga en cuenta las condiciones de quienes viven en los territorios donde los proyectos se instalan, un acceso justo y no solo para quienes puedan pagarlo, condiciones dignas de trabajo, que considere la energía como un derecho humano fundamental y que en el entendido de la interdependencia cuide del ambiente, porque es quien sostiene nuestra vida.

La transición justa cobra especial importancia en el sur del mundo, que carga con una historia de saqueo y desposesión de sus bienes y recursos naturales a manos del norte global. La deuda ecológica y social es, aunque no reconocida oficialmente, innegable, pero también lo son la resistencia y la lucha organizada que se han desplegado en estos territorios. La transición energética del norte no puede ni debe pagarla el sur. Y esta no será justa si se llevan los recursos naturales, como el litio de América Latina para las baterías de los autos eléctricos en Estados Unidos. No será justa si las personas en Europa pueden acceder a calefacción gracias al cobalto o el cobre africano, pero una persona en ese continente no tiene dónde hacer la comida, o el acceso a la energía la enferma (como la quema de madera y el humo que genera).

En este sentido, la lucha de trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos tiene mucho que aportar a las luchas ambientales y viceversa. En primer lugar, porque el motivo de reivindicación es precisamente la vida, y sin vida no hay trabajo ni salario. En segundo lugar, porque históricamente ha aportado a la noción de unidad más allá de los sectores y fronteras. En tercer lugar, porque son las y los trabajadores (con o sin remuneración) quienes mueven y sostienen el mundo. Articulados con los movimientos sociales en territorio, tienen la potencia y la intención de transformarlo.

Este trabajo tiene el objetivo de mapear experiencias sindicales en la región latinoamericana y caribeña que con distintos elementos de incidencia política, investigación o articulación social hayan abonado el camino a la transición justa. Reconocer, registrar y sistematizar las experiencias ayuda a visualizar el acumulado regional y por tanto a engrosar de manera práctica las luchas que vendrán.

Mediante conversaciones con sindicatos, centrales y confederaciones de la región, documentos y noticias, el objetivo es profundizar en herramientas, procesos y aprendizajes para trazar una hoja de ruta que recorra los avances y desafíos, basada en la experiencia.

2. Experiencias sindicales

No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a Floresta Amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade.

Chico Mendes fue un sindicalista que defendió el Amazonas. Un trabajador del caucho, asesinado por resistir la tala de árboles. El cruce de las luchas ambientales y sindicales es histórico, pero la actual crisis climática exige un cambio radical, pensar un nuevo modelo energético y por tanto un nuevo modelo de desarrollo y una reorganización del mundo del trabajo.

Este es un proceso profundo que se encuentra con contradicciones en el camino y solo es posible en articulación con otros procesos y pensado desde una perspectiva emancipadora, una perspectiva de ganancia, no de pérdida; de potencia, no de carencia.

América Latina tiene diversas experiencias sindicales y populares vinculadas a la justicia ambiental y el acceso a los bienes comunes, como la del sindicato de trabajadores de Obras Sanitarias del Estado (OSE) en Uruguay —empresa estatal encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento del país—, que logró en el año 2004, aliado con movimientos ambientales, reformar la Constitución del país e incluir el agua como derecho humano fundamental. Y hasta el día de hoy resiste a los proyectos privatizadores del agua.

En la actualidad y desde el año 2013, la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE) lleva adelante la campaña «La tarifa eléctrica es injusta, bajarla es posible». Recordemos que Uruguay es uno de los países pioneros en el cambio de matriz energética, pero el hecho de que la energía sea limpia no la hace accesible.

Además, AUTE tiene una brigada solidaria que organiza jornadas de reacondicionamiento de instalaciones en menderos, escuelas rurales y viviendas afectados por eventos climáticos o por las condiciones precarias de vida. En su página web expresa: «detrás de cada intervención hay muchas historias que hablan de un país que sigue teniendo grandes desigualdades y donde garantizar el derecho a la energía eléctrica es un logro».

Muchos sindicatos empujaron procesos de nacionalización de la industria energética, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, con un claro componente de soberanía y democratización. Estos procesos se sostienen en la historia de personas trabajadoras organizadas, pero hoy, además de profundo, esto se hace urgente.

En las narrativas y los trabajos documentales de las articulaciones y confederaciones latinoamericanas de sindicatos se reflejan la intención clara y la dimensión de la urgencia de trabajar por una transición energética justa. Tanto para la Confederación Sindical de las Américas (CSA) como para IndustriAll Global Union y la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), la transición justa es un tema central de la agenda.

«La Transición Justa construye un camino justo y equitativo hacia un futuro sostenible», se puede leer en el portal de IndustriAll, que nuclea a personas trabajadoras del sector minero, energético e industrial en 140 países.

La CSA, por su parte, construyó la Plataforma del Desarrollo de las Américas (PLADA), un documento programático en el que están presentes la dimensión ambiental y sus principios: «La transición justa constituye la propuesta prioritaria del movimiento sindical frente a las consecuencias negativas del cambio climático y la crisis ambiental en los pueblos. Es un movimiento global que pone en primer plano la necesaria articulación entre los principios de justicia social y justicia ambiental».

«La lucha contra el cambio climático es una lucha por el cambio del sistema. Las y los trabajadores deben ser parte de las soluciones climáticas y beneficiarse de programas de transición justos y equitativos», afirma David Boys, secretario general adjunto de la ISP, en su página web.

De la misma manera, tanto en confederaciones como en centrales sindicales existen espacios que pueden tomar distintas formas: comisiones, secretarías, áreas o equipos de trabajo dedicados específicamente a una transición justa. Esto permite a personas trabajadoras organizadas formarse, preguntarse sobre su rol en este proceso y construir sus propias narrativas mediante la generación de documentos. IndustriAll, por ejemplo, tiene una *Guía sindical de prácticas para una transición justa*, así como la CSA tiene elaborados informes que pueden servir de guías para estas prácticas.

Narrativas y formación

Toda transformación empieza por conocer aquello que se quiere transformar. Muchas centrales de distintos países latinoamericanos trabajan en ello mediante conversatorios, talleres, intercambios e investigaciones.

Desde el sector de la energía en Uruguay, el secretario general de AUTE, Johny Saldivia, problematiza la necesidad de discutir el acceso de la población a la electricidad y plantea que para esto es necesario ocupar lugares de discusión. «Por eso formamos parte de TUED, y vamos a encuentros regionales», dijo en referencia al encuentro de los Sindicatos por la Democracia Energética (TUED, por sus siglas en inglés), una iniciativa global que tiene como cometido avanzar en la dirección y el control democrático de la energía para promover soluciones a la crisis climática, la pobreza energética, la degradación de tierras y de gente y responder a los ataques a los derechos y las protecciones de los trabajadores.

Para el dirigente, es fundamental poner el tema en discusión y que exista participación «por medio de la estrategia de la educación popular», utilizando las escuelas de formación donde se dictan talleres de electricidad en conjunto con otros planes de la municipalidad. Según Saldivia, el desafío como sindicato es el de problematizar y explicar a la población las altas tarifas de manera sencilla: «¿Qué estoy pagando, y a quién le estoy pagando? ¿Quién se está llevando la ganancia? ¿Por qué, si el aire y el sol son gratis, pago tanto de energía?».

Desde República Dominicana, Massiel Figueredo, integrante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), parte de la CSA, destaca los avances que han logrado articular. Entre ellos, la creación en 2008 de la PLADA, que abarca cuatro dimensiones: política, económica, social y ambiental. Para Figueredo, «es imposible garantizar un desarrollo, un cambio hacia un mundo más sustentable, si no se ven de manera integral estas cuatro dimensiones porque están íntimamente relacionadas».



Menciona, además, cómo desde distintos grupos de trabajo han sido parte de la creación de la Estrategia Nacional de Desarrollo del país. «Fue un ejercicio democrático donde el gobierno de turno invitó a todos los sectores de la sociedad civil, sindicatos, ONG, instituciones y academia, para discutir en mesas de trabajo sobre medioambiente, economía y salud». La Estrategia Nacional fue además un ejercicio de negociación en el que la perspectiva sindical fue considerada.

A su vez, lograron que en el ámbito educativo se incluya en los currículos el material ambiental. «Para nosotros es muy importante como país, porque el año entero estamos siendo víctimas de fenómenos climáticos extremos que afectan dramáticamente el desarrollo, la economía y las condiciones de vida y trabajo de las personas», explicó.

En el caso de Colombia, un hito importante fue la creación del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Justo del Sector Minero Energético de Colombia (CIPAME), producto de la articulación de sindicatos minero-energéticos del país, que será mencionado más adelante. Para Marely Cely, investigadora del CIPAME, las instancias de formación son parte fundamental de este proceso: «Hicimos un diplomado y citamos a la mayoría de las organizaciones sociales y académicas que han discutido el tema de la transición». Además de llevar expertos en el tema, como la organización Censat Agua Viva, diversificaron las áreas, para no reducir el tema solamente a cuestiones técnicas y académicas.

En la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT Brasil), el tema ambiental es transversal al trabajo desde sus inicios, desde antes de que existiera el término *transición justa*. Por esto la central advierte sobre la cooptación y «universalización» del concepto, y subraya que no es lo mismo hablar de una transición justa en el norte que en el sur. Este proceso debe atender las diferencias ambientales, organizativas, históricas y políticas de cada territorio, de cada región.

Alejandro Ochoa, secretario de Medio Ambiente y Transición Justa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, menciona que lo principal, en su caso, fue plantear una estrategia de educación ambiental «para entender el dialecto». En referencia a que el dialecto ambientalista y el empresarial son muy distintos del sindical «y más del sindical ecológico que queremos ir formando». A su vez, reconoce que «hay que avanzar en aterrizar esto a las bases».

Si bien la formación teórico-política es fundamental, Ochoa entiende que ver los impactos en los territorios imprime un entendimiento más cabal de la realidad. En la quinta región de Chile, en el municipio de Quintero, las centrales termoeléctricas intoxicaron en 2022 a 50 escolares y 25 funcionarios de centros educativos de la zona, por un pico de dióxido de azufre.

En consonancia con esto, Ochoa subrayó la importancia de los/as trabajadores/as como contraparte para ejercer presión sobre las empresas, porque quienes trabajan en una industria con impactos socioambientales «no son los responsables políticos de esas decisiones y no participan de ellas, pero sí pueden ejercer presión e incidencia».

Articulación y redes

En mayor o menor medida, todos los países se enfrentan a las consecuencias del cambio climático y con esto a la certeza de que no solo es imprescindible una transición, sino también un cambio en el modelo de desarrollo. Por esto se torna necesaria una articulación entre los diferentes sindicatos, y también entre sindicatos y movimientos sociales, ambientalistas, feministas, campesinos, indígenas, entre otros, que se dedican específicamente al tema de la transición justa, que se ven afectados y que han construido o ponen en práctica alternativas superadoras.

En el ejemplo de República Dominicana, al ser víctimas frecuentes de fenómenos climáticos extremos que afectan dramáticamente el desarrollo, la economía y las condiciones de vida de las personas, se hace clara la urgencia de buscar este cambio, a pesar de que el país caribeño ocupa el puesto 89 en el ranking de países emisores de dióxido de carbono (CO₂) en el mundo. Ranking liderado por China, seguida de Estados Unidos en segundo lugar.

Puede decirse entonces que el discurso sobre la importancia de descarbonizar parte de una necesidad actual del norte global. Para Johny Saldivia, es «injusto que el sur tenga que descarbonizar lo que genera el norte», teniendo en cuenta que las principales empresas que desembarcan en el sur con proyectos, por ejemplo, de hidrógeno verde son provenientes de esos países. «Es la historia en sí misma. Pasa de nuevo. Es el colonialismo una vez más», concluye.

En palabras de Saldivia, es interesante leer si estas acciones van en busca de una transición o de una ampliación. «Alemania, por decir algo, ¿va a dejar de producir acero para generar armamento de guerra? No lo hace». La energía que necesita generar en otros países para llevársela es «para ampliar su matriz, no para una transición», indica.

Respecto a estos proyectos de hidrógeno verde que pululan en la región como si fueran la salvación del medioambiente se han advertido varias problemáticas, en diferentes territorios, por eso el traspaso de experiencias y la articulación son fundamentales.

En una mesa de debate llevada adelante en Uruguay en el mes de marzo, se trabajó sobre aspectos que preocupan, como la reconversión laboral, el cambio de matriz energética, el modelo extractivista y algunas problemáticas puntuales del país como el proyecto de hidrógeno verde que desembarcó y afecta a la localidad de Tambores en el departamento de Paysandú. De la mesa formaron parte

integrantes de la confederación de sindicatos industriales, el Observatorio del Sur, el sindicato de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), habitantes de la localidad de Tambores en contra del proyecto, REDES - Amigos de la Tierra Uruguay e integrantes del colectivo mexicano Geocomunes.

Además de articulaciones nacionales como la nombrada, existen articulaciones y redes regionales entre movimientos que incluyen, por supuesto, la participación de personas trabajadoras organizadas y tienen en su agenda común a la transición energética justa.

Es el caso de Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, una articulación de movimientos sociales latinoamericanos con amplia participación sindical, que en febrero del 2024 construyó una agenda común con seis puntos fundamentales, entre los cuales consta «la transición justa y soberanía energética para la integración».

Otra experiencia de articulación es la Cumbre de los Pueblos, un evento que se realizará de forma autónoma en paralelo con la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que este año se realizará en Belém, Brasil. Esta actividad reúne a movimientos sociales y populares, coaliciones, colectivos, redes y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas sindicatos y centrales. En su manifiesto consta un punto sobre la transición energética justa.

Incidencia y participación

Ochoa —secretario de Medio Ambiente y Transición Justa de la CUT de Chile— pone un ejemplo que muestra la complejidad de la transición justa en el ámbito laboral: «Hemos conseguido que no haya un abuso masivo en el proceso de cierre de las termoeléctricas, que Chile lo tomó de manera muy ambiciosa sin hacer una evaluación de cuáles podrían ser los efectos de daño sociales y locales». Chile se comprometió a alcanzar para el 2050 neutralidad en carbono. Ochoa agregó: «el cierre no se estaba haciendo por un tema de necesidad del planeta, sino que era por un tema de que las unidades eran antiguas y era más caro mantenerlas». Sobre este tema reflexionó que es para desconfiar que quienes contaminaron y explotaron durante tantos años ahora aparezcan «salvando al planeta».

Pero el tema no termina con el cierre de las termoeléctricas. Según Ochoa, las empresas se retiran y «evaden la responsabilidad que tienen sobre los daños causados, cuando tiene que haber recuperación y remediación de la zona afectada». En este sentido, participaron en el proyecto de ley de transición justa —en Chile se le llama transición socioecológica justa—, que es el plan nacional que se va a aplicar para la remediación, mediante la creación en

2022 de una Oficina de Transición Socioecológica Justa, que busca implementar el cambio de modelo de desarrollo propuesto por el gobierno de Gabriel Boric para enfrentar la crisis climática, ecológica y la desigualdad.

La CUT de Chile participó en una mesa dedicada a la sociedad civil en la construcción de este proyecto de ley. En palabras de Ochoa, se logró tener un rol importante: «fuimos claros en desenmascarar ciertas cosas de los empresarios». Además, la CUT de Chile participa en los Consejos de Recuperación Ambiental y Social (CRAS) que se formaron en 2014, que son comités locales integrados por autoridades locales y organizaciones sociales locales, en los que han trabajado temas de recuperación y remediación de la industria en general.

El dirigente de la CUT de Chile pone sobre la mesa algunos datos: «la agricultura tiene un 12% de pérdida de terreno agrícola fértil por la instalación de paneles solares, porque no tenemos políticas públicas que regulen bien el sistema».

Que la COP30 se desarrolle en territorio brasileño hace de este un año muy especial para la central de trabajadores en Brasil. En este sentido, la CUT Brasil está organizando un ciclo de debates formativos previos con temas como soberanía, crisis climática, transición justa y lucha sindical.

Un claro ejemplo de injusticia en la transición energética es lo que sucede en el noreste brasileño con la instalación de parques eólicos. Sobre esto, la CUT Brasil realizó un informe y en su presentación Daniel Gaio, secretario de Medio Ambiente de la CUT, expresó que el estudio divulgado «deja claro que este proceso no puede guiarse únicamente por los intereses del capital privado. Necesitamos un modelo coordinado por el Estado, con participación social en su gestión y que garantice la justicia social regulando el uso del suelo y protegiendo a las comunidades locales. La transición energética solo será realmente justa si va acompañada de diálogo social».

La central de trabajadores brasileña acompaña el proceso de denuncia de la instalación de parques eólicos en el noreste brasileño denunciando las injusticias y abusos empresariales sobre las comunidades y personas trabajadoras rurales de la zona, revisando contratos abusivos de alquiler o venta de tierras y exigiendo fiscalización real a las empresas que se instalan en los territorios.

En el caso de Uruguay, la cancelación de la instalación del Proyecto Neptuno en la zona de Arazatí tuvo al sindicato de los trabajadores/as del agua (Federación de Funcionarios de Ose, FFOSE) trabajando para lograr su nulidad mediante un recurso judicial sobre el contrato celebrado entre el Estado y el consorcio encargado de las obras.

La iniciativa del Proyecto Neptuno generó críticas de los sindicatos así como de organizaciones de la sociedad civil, por su inconstitucionalidad (recordemos que Uruguay

establece en su Constitución desde el año 2004 que el suministro de agua debe ser un servicio público prestado por empresas estatales y sin fines de lucro), dado que de esta manera podría generarse una privatización del agua.

Respecto a la calidad del agua, la viabilidad de potabilizar el agua del Río de la Plata en Arazatí se vio cuestionada por su alta variabilidad en cuanto a salinidad y presencia de cianobacterias, la falta de estudios suficientes y el impacto ambiental, como la afectación de humedales y la disposición final de los lodos deshidratados.

El sindicato de trabajadoras y trabajadores del agua tuvo instancias de intercambio con el gobierno y tomó medidas de lucha diversas (movilizaciones, jornadas de información, entre otras) y hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que la cancelación del proyecto fue fruto de la organización social y la articulación entre sindicalismo y ambientalismo.

Alternativa en acción

Un ejemplo concreto de cómo los sindicatos participan activamente en la transición energética justa es el caso colombiano. Un caso que muestra unidad y acción.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBÓN), el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (SINTRAEECOL) y la Unión Sindical Obrera (USO) están directamente involucrados en la discusión sobre la transición justa en la industria minera colombiana. Y tienen alternativas concretas al cierre de las minas. De hecho, SINTRACARBÓN, específicamente, negoció con la empresa Cerrejón la participación de los trabajadores en el plan de cierre de la mina, cuya licencia de explotación vence en 2034. Cuando se discutió sobre el cierre, se hizo hincapié en el cierre de la mina no desde una perspectiva laboral sino desde una perspectiva de desarrollo.

Estos sindicatos, además, junto con otros, en agosto de 2021, como producto del Encuentro Político de Unidad Minero-Energética para la Transición Justa de Colombia, firmaron una declaración política unitaria para impulsar cambios en las políticas minero-energéticas y crearon el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Justo del Sector Minero Energético de Colombia (CIPAME) que se hizo público en mayo del 2022.

Igor Díaz, representante sindical de SINTRACARBÓN, dijo en un seminario sobre el futuro del carbón que el sustento de 80.000 personas en Colombia depende del carbón, pero que los anuncios de transición energética del gobierno carecían de un plan concreto en materia laboral. En respuesta, los sindicatos propusieron subsidios para programas de reconversión profesional, inversión pública en investigación y desarrollo de carbón limpio, así como un plan de acción conjunto para políticas de transición inclusivas que protejan el bienestar de los trabajadores.

Es fundamental en este proceso la inclusión de cláusulas en la negociación de los sindicatos con las empresas que pretenden utilizar los recursos de los territorios. Tanto USO como SINTRACARBÓN las han agregado.

En esta línea, los sindicatos del sector de la industria del carbón presentaron el 1.º de mayo de 2025 un pliego único marco sectorial al gobierno de Colombia y a las empresas multinacionales con el objetivo de garantizar en sus regiones una transición justa ante la posibilidad de cierres mineros y retiro de las compañías.

«En el pliego exigimos que este proceso se lleve a cabo de manera equitativa y con el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y ambientales que dichas empresas tienen derivadas de sus actividades extractivas», dice el documento. «Esta iniciativa demuestra con claridad que los sindicatos de la industria del carbón en Colombia están llevando a cabo acciones concretas para garantizar procesos de transición justa, no solo para las y los trabajadores, sino también para todas las comunidades de las regiones afectadas, mucho antes de que inicien los procesos de cierre de las operaciones mineras», específica, y finaliza solicitando que se garantice como prioridad la protección social de las y los trabajadores, mediante la «diversificación económica productiva, así como una reconversión justa adaptada a las necesidades de cada territorio».

3. Hoja de ruta

Se ve a lo largo del tiempo a las diferentes estructuras sindicales trabajando sobre aspectos variados de la transición energética justa como son: la energía como derecho humano, la defensa de las empresas públicas del sector y por tanto la soberanía energética.

Son notorios los avances en lo que refiere a investigación, desarrollo de documentos e interiorización del problema en toda la región. También existe un gran esfuerzo por la formación y capacitación de trabajadoras/es sobre transición justa y una clara intención de articulación con otros movimientos sociales. Es decir, hay una visibilización y una intención de realizar un cambio. De la misma manera, se puede ver a los sindicatos involucrados en articulaciones y participando activamente de procesos regionales, ganando espacios y generando los debates correspondientes.

Las organizaciones de trabajadores también han tenido un rol clave en la denuncia de lo que se denomina «falsas soluciones» o «soluciones verdes», como el caso mencionado del hidrógeno verde como solución a la descarbonización.

Sin embargo, la bajada a los territorios siempre es compleja. Son pocas las narrativas que muestran la transición justa como una ganancia para el mundo y las

personas que lo habitan. Las pérdidas que esto podría ocasionar en materia de puestos de trabajo a menudo toman un papel central en las discusiones y el miedo paraliza las acciones que puedan ser propuestas. Las narrativas se focalizan más en las pérdidas que esto ocasiona y en reducir sus impactos.

Por esto, es necesario ampliar el entendimiento del mundo del trabajo e incluir las diferentes formas que existen hoy (tercerizaciones, trabajo independiente, a distancia, mediado), además del trabajo no remunerado, que, como bien muestra el movimiento feminista, sostiene la vida. Pensar en una redistribución de tareas y romper con la división sexual del trabajo se hace urgente en el actual contexto de crisis ambiental.

A su vez, se torna necesario hacer una distinción de los impactos en los diferentes tipos y sectores de trabajo, ya que las consecuencias en salud no serán las mismas para quien trabajó en una mina durante 20 años que para quien lo hizo en una oficina. Una investigación de CIPAME da cuenta de que una persona que se pensiona en el carbón tiene un período de vida posterior de no más de dos años; «es decir, ellos se pensionan y prácticamente se mueren», por lo que los carboneros tienen en su cabeza que abandonar la mina implica morir, explicó Cely.

En este sentido, Cely asegura que «el neoliberalismo se nutre del patriarcado. El patriarcado les ha enseñado a los varones que se tienen que explotar también ellos», en referencia a que los varones en Colombia aceptan recibir salarios altos a costa de exponerse a condiciones de trabajo que afectan su salud. «No importa si no realizo un proyecto de vida, no importa el agua que tomo, no importa si daña todo el medioambiente, no importa, porque la discusión se ha vuelto una discusión meramente productiva alrededor incluso del cuerpo del trabajador»; e ilustra y añade que «el cuidado también es revolucionario».

Podemos decir que hay experiencias buenas en el camino de la transición energética justa, pero fragmentadas, vinculadas solo a algunos aspectos de esta. Los mayores desafíos se encuentran en incluir la discusión de cómo reorganizar el trabajo en la sociedad y visualizar otras formas de trabajo que no sean asalariado o productor de mercancía. La dificultad de encontrar casos concretos y acciones inspiradoras que motiven o sirvan de ejemplo para otras personas trabajadoras hace que pasar de la posibilidad a la realidad sea una fase lejana aún. Cuando no se visualiza una salida clara, el recorrido es errante.

4. Agradecimientos

Agradecemos a todas las personas que de una manera u otra aportaron a este trabajo, que compartieron sus experiencias y conocimientos.

Además de las personas y organizaciones citadas en el texto, también aportaron información valiosa el magíster en Sistemas Ambientales Humanos de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina Pablo Bertinat; Tali Pires Almeida, asesora política de la CUT Brasil; Marcos Mí-guez, integrante del sindicato de OSE y Euan Gibb, secretario regional de la ISP.

Sobre las autoras

Valentina Machado Areco. Licenciada en Comunicación por la Universidad de la República. Integrante del equipo de comunicación de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay. Periodista de Radio Mundo Real. Integrante del colectivo social Radio Pedal.

Sofía Umbre Otaduy. Licenciada en Comunicación por la Universidad de la República. Periodista independiente de radio y prensa escrita. Actualmente trabaja como comunicadora institucional y cursa la Maestría en Historia Política de la Udelar.

Friedrich-Ebert-Stiftung

Centro Regional Sindical

Gral. Arturo Baliñas 1145, Piso 8
Montevideo, Uruguay

Responsables

Dörte Wollrad
Directora

Viviana Barreto
Directora de proyectos

Corrección
Maria Lila Ltaif

Diseño y diagramación
Cooperativa de Comunicación SUBTE

ISBN 978-9915-9662-9-8

Más información:
➔ www.sindical.fes.de

Contacto:
sindical@fes.de

